



Observatorio de Políticas Públicas



Cuerpo de Administradores
Gubernamentales
SECRETARÍA DE GABINETE

DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA DISCAPACIDAD *1983 – 2009*

CAT. OPP/CAG/2009-01

NOVIEMBRE DE 2009

Equipo

AG Daniel LÓPEZ (Coordinador)

AG Luis DALLE NOGARE

AG Jorge ESTÉVEZ

AG Nancy FERNANDEZ

AG Norma GIL

AG Enrique PALMEYRO

AG Daniel PAOLILLO

AG Carlos ROGET

AG Silvia SORICHETTI

Este documento fue producido por integrantes del Area Temática “Políticas acerca de la Discapacidad” del Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el año 2009. Las opiniones expresadas corresponden pura y exclusivamente a los autores, y de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, podrán ser interpretadas como que establecen una posición oficial del Editor.

El Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales inició sus actividades en el año 2002 en jurisdicción de la Coordinación General del C.A.G., sus documentos son publicados en el sitio WEB oficial de la Secretaría de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

*AG Lic. V. Daniel Piemonte
Coordinador General del
Cuerpo de Administradores Gubernamentales*

*AG Ing. Guillermo J. Alabés
Coordinador Ejecutivo del
Observatorio de Políticas Públicas*

Contenidos

1. Introducción
2. Un Cambio de Paradigma
3. Las Políticas Públicas sobre Discapacidad
4. Menciones Constitucionales sobre Discapacidad
5. Conclusiones

Lista de Referencias

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende ser una mirada a las políticas que el Estado ha desarrollado en los últimos veintiséis años en relación con la “Discapacidad”.

En este período han sucedido muchos cambios, tanto en lo normativo como en la organización del Estado en relación con las personas discapacitadas. También, y no es un hecho menor, se ha verificado un cambio cultural en la sociedad mundial respecto del tratamiento de este tema.

A modo de hoja de ruta de este trabajo, relatamos el camino que hemos seguido en esta recorrida a lo largo de este tiempo:

En la primera parte tendremos una introducción al cambio de paradigma en la ubicación que esta temática tiene dentro del campo perceptivo estatal.

Este cambio de paradigma no sólo impacta sobre la manera de encarar sino que también supuso modificaciones de la ubicación estructural de los programas de atención de esta temática como así también un incremento de la importancia relativa de algunos sectores en detrimento de otros.

En relación con las políticas, dividimos en tres partes: 1) las políticas erráticas, es decir aquellas que siguieron determinados organismos de gobierno de manera inconsulta con los organismos competentes en la temática de discapacidad 2) las políticas preventivas, asociadas básicamente al tema salud y 3) las políticas positivas que giran en torno a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (en adelante Co.Na.Dis)..

¿Porqué nos centramos en la Co.Na.Dis.? Porque estamos convencidos de que la expresión por antonomasia de una política pública se da en el órgano específico que un Gobierno dispone para su tratamiento.

De la modificación de sus responsabilidades y, en definitiva, de su accionar es posible intuir hacia qué rumbo se encamina la acción de Gobierno.

Por último y con la expresa salvedad de lo infructuoso que sería pretender agotar el tema, daremos un recorrido sobre los grandes cambios a nivel de la normativa.

En este sentido cobra especial interés reseñar la oportunidad que significó –en el ámbito Nacional– la reforma de la norma constitucional y que generó iniciativas similares en diferentes provincias.

Ese momento fue tomado por las distintas organizaciones y personas dedicadas a la promoción de normas que abordaban la “discapacidad” como el tiempo adecuado de incorporar de un modo más explícito aún, un conjunto de valores comunes.

Por último en el espacio de las conclusiones expresamos algunas ideas sobre el camino a seguir en el tema.

2. UN CAMBIO DE PARADIGMA

Durante estos veintisiete años se ha producido un cambio que, a primera vista resulta simple y casi de sentido común, pero a medida que nos alejamos en el tiempo vemos que ha tenido un impacto profundo, primero en la conceptualización del fenómeno de la “discapacidad” y en segundo lugar en las herramientas –de todo tipo: normativas, organizativas, culturales, etc. – con que el Gobierno y, en última instancia, la sociedad se ha hecho cargo de este fenómeno.

¿Cuál es la naturaleza de este cambio, este giro copernicano en la manera de comprender la discapacidad y por ende, a las personas con discapacidad?

Pues se ha puesto de manifiesto la migración de una concepción basada en un enfoque médico o vinculado a la beneficencia para pasar hacia la adopción de un punto de vista que enfoca la discapacidad desde la óptica de los derechos humanos.

En el plano mundial, en los dos últimos decenios y en este sentido los cambios producidos en nuestro país con la vuelta de la democracia acompañan este movimiento, se ha producido este excepcional cambio de perspectiva, pues ya no es el enfoque centrado en la salud o en la caridad sino los Derechos Humanos el criterio que se aplica al analizar la discapacidad.

En lo esencial, este nuevo enfoque de la discapacidad basada en los derechos humanos tiene como punto de anclaje el considerar sujetos, y no objetos, a las personas con discapacidad.

El gran cambio que ello supone es dejar de considerar a las personas con discapacidad como “un problema” y pasar a considerarlas como personas poseedoras de derechos.

Lo más importante de este cambio es que logra situar los problemas fuera de la persona con discapacidad y así permitir un abordaje que muestre en los diversos procesos económicos y sociales cuáles son los elementos que se tienen en cuenta.

Esto, según sea el caso, establece la diferencia implícita en la mirada sobre la discapacidad.

Por todo esto se piensa que la discusión sobre los derechos de los discapacitados tiene mucho que ver con un debate aún más amplio sobre el lugar que para la sociedad ocupa la “diferencia”.

Lo que en el mundo en general y en nuestro país en particular se debate es acerca de si los derechos de las personas con discapacidad tienen o no que ver tanto con el disfrute de derechos específicos como con garantizar “efectivamente” a las personas con discapacidad el disfrute de estos derechos en situaciones de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.

Este principio, el de “no discriminación” colabora para que los derechos humanos en general sean aplicables en el contexto específico de la discapacidad, como es el caso en los contextos de la edad, el sexo y la infancia.

Por todo lo expuesto, la no discriminación y el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad son el tema de análisis predominante de la tan esperada reforma en este tema.

Este proceso de reforma en la manera en que el Estado se ocupa de la discapacidad, se inspira en los valores que sustentan a los derechos humanos: la inapreciable dignidad de todos y cada uno de los seres humanos, el concepto de autonomía o de libre determinación que exige que la persona sea el centro de todas las decisiones que le afecten, la igualdad inherente de todos independientemente de las diferencias y la ética de la solidaridad que la sociedad exige para sustentar la libertad de la persona con los apoyos sociales correspondientes.

En este punto debemos señalar que el “cambio paradigmático” respecto de las personas con discapacidad se desarrolla a nivel mundial siendo su expresión la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Esta Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración.

La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. Adopta una clasificación amplia de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

2.1. Enfoque de los Derechos Humanos

2.1.1. El Ser Humano como sujeto y no como objeto ¹

Cuatro valores: la dignidad, la autonomía, la igualdad y la solidaridad, revisten particular importancia tanto en términos generales como en el contexto de la discapacidad.

La dignidad humana y el concepto social de la discapacidad

La dignidad humana es la norma básica de los derechos humanos. Todas y cada una de las personas tienen un valor inestimable y nadie es insignificante. En este enfoque, las personas son valoradas no sólo porque son útiles desde el punto de vista económico u otro, sino por su valor intrínseco.

El reconocimiento del valor de la dignidad humana nos recuerda con fuerza que las personas con discapacidad tienen un papel y un derecho en la sociedad que hay que atender con absoluta independencia de toda consideración de utilidad social o económica. Esas personas son un fin en sí mismas y no un medio para los fines de otros.

En términos sociales, a las personas con discapacidad, por su relativa invisibilidad, se los trataba como objetos a los que había que proteger o compadecer.

En los últimos años a menudo se ha contrastado el "modelo médico" o el "modelo caritativo" de la discapacidad con el modelo de "derechos humanos".

El modelo médico se centra en la detección y puesta en foco de los rasgos médicos de las personas, en especial sus discapacidades. Esto hace que se sitúe el "problema" de la discapacidad en la persona.

El modelo médico conlleva una actitud social más extendida y profunda, tiende a asociar el problema a la persona y considerarla un objeto de intervención clínica.

El modelo caritativo es una derivación del modelo médico, determinado que el problema está en la persona y, luego de la correspondiente intervención clínica, aparece la "sociedad" en sus diversos estamentos "ayudando" o supliendo las necesidades de las personas con discapacidad.

El modelo de derechos humanos sitúa al individuo en el centro de todas las decisiones que le afectan y, lo que es aún más importante, ubica al "problema de la discapacidad" fuera de la persona, en la sociedad.

De esta concepción se concluye que es el estado quién tiene la responsabilidad de hacer frente a las barreras creadas por la sociedad para poder garantizar el pleno respeto

¹ Informe de Naciones Unidas (HR/PUB/02/1- Número de venta: S.02.XIV.6) "Uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad" Gerard Quinn y Theresia Degener con Anna Bruce, Christine Burke, Dr. Joshua Castellino, Padraic Kenna, Dra. Ursula Kilkelly, Shivaun Quinlivan Naciones Unidas - Nueva York y Ginebra, 2002

de la dignidad y la igualdad de derechos de todas las personas. Este mismo argumento puede ser entendido viendo a la discapacidad como un "concepto social".

La primera premisa del modelo del "concepto social" reside en que la diferencia humana no es innata sino algo inventado por la sociedad y aplicado mediante etiquetas como ser "los discapacitados".

Así, uno no nace "pobre" o "mujer" o "discapacitado". A uno le adjudican la etiqueta en relación con alguna norma no expresa como la riqueza, masculinidad o no poseer discapacidad.

La segunda premisa es que la norma en relación con la cual uno es evaluado y etiquetado (riqueza, masculinidad, no ser discapacitado) generalmente no se elige por un proceso neutral o desinteresado.

Es por ello que muchos defensores de los derechos de las personas con discapacidad consideran correcto que se use la expresión "los discapacitados" en vez de "las personas con discapacidad", de esta forma se destaca el hecho de que es la sociedad la que discapacita a la persona.

La tercera premisa de esta forma de conceptualizar la discapacidad, asume un rol crucial: el concepto social de la discapacidad se utiliza no sólo para apartar a las personas sino también para mantenerlas apartadas.

Es notable observar que muchas de las cuestiones de la vida cotidiana (la educación, el trabajo, la familia o la interacción social) se articulan en sus aspectos generales usando como marco de referencia las necesidades de los grupos de usuarios más habituales, en este caso el de las personas sin discapacidades.

Normalmente no se toman prevenciones para las diferencias respecto de la norma elegida, este enfoque, sin proponérselo de manera explícita, en la práctica opera como marco de exclusión.

Como ejemplo podemos citar al entorno arquitectónico el cual está pensado para las personas que no tienen problemas motores y no para las que usan sillas de ruedas.

En lo que respecta a las comunicaciones, allí generalmente se toma como usuarios arquetípicos a aquellos con la capacidad de oír y hablar.

Y en el universo educativo apenas se prevén soluciones para otras formas de aprendizaje. Y lo mismo sucede en todos los ámbitos.

Puede establecerse un vínculo entre el modelo de "concepto social" de la discapacidad y la perspectiva de la discapacidad basada en los derechos humanos.

Podemos observar para encarar el tema desde un punto de vista más favorable que el objetivo último desde la perspectiva del modelo de derechos humanos es posibilitar la

construcción de sociedades que sean auténticamente integradoras, sociedades que valoren la diferencia y respeten la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos con independencia de sus diferencias.

Autonomía de un espacio para el desarrollo del espíritu humano

La autonomía como valor asociado a la dignidad entraña la apertura de un espacio libre o sin restricciones para la acción voluntaria basada en la conciencia y las elecciones vitales libremente adoptadas de la persona, preservando al mismo tiempo una libertad comparable para los demás.

La óptica de la discapacidad con centro en los derechos humanos supone un planteamiento de mayor sutileza, un planteamiento que no se inclina de manera excesiva por detectar la incompetencia y que hace el mismo hincapié en la necesidad de otorgar una protección efectiva de los derechos y los intereses de las personas que son declaradas legalmente incompetentes.

Muchas veces la sociedad no se toma en serio la autonomía de las personas con discapacidad y sus elecciones vitales no son consideradas tan merecedoras de apoyo social como las de los no discapacitados.

La igualdad: valorar la diferencia

La igualdad humana es también un derecho básico en el sistema de libertades fundamentales que postula la legislación de derechos humanos.

Se basa, de modo fundamental, en que todas las personas poseen no sólo un valor intrínseco inestimable sino que también son intrínsecamente iguales en lo que se refiere a su valor, con independencia de sus diferencias externas.

Esto no significa que no existan diferencias entre las personas. Significa que una sociedad realmente igualitaria es aquella que adopta un criterio positivo respecto de las diferencias humanas y las tiene en cuenta de forma positiva.

Esta valoración de la diferencia humana es el objetivo del criterio del "concepto social" y también está validada por la perspectiva de derechos humanos.

Tomar en serio la ética de la "igualdad de oportunidades" en el contexto de la discapacidad entraña exigir varias formas de acción o intervención del gobierno.

- La igualdad de oportunidades supone hacer frente a la exclusión estructural en esferas como los transportes, los equipamientos públicos, los servicios públicos y las comunicaciones.
- La igualdad de oportunidades entraña garantizar que las personas con discapacidad sean adiestradas hasta el máximo de sus capacidades para asumir un papel productivo y socialmente responsable en la sociedad civil.

- La igualdad de oportunidades exige combatir los casos de discriminación que excluyen a las personas con discapacidad de diversas esferas de la vida cotidiana.
- Un programa coherente de "igualdad de oportunidades" supone hacer frente a actitudes sociales profundamente arraigadas en relación con la discapacidad.

La solidaridad: apoyo social para una población libre e igual

El valor de la solidaridad está basado en la conciencia de que existen lazos y obligaciones mutuas entre las personas por el hecho de ser miembros de la misma comunidad política.

La libertad no existe en el vacío; debe ser tangible. Se ha dicho y escrito mucho sobre conceptos como la indivisibilidad, la interdependencia y la relación entre los derechos civiles y políticos, por un lado, y los derechos económicos, sociales y culturales por otro.

Las relaciones existentes entre ambos universos de derechos son reales y profundas, pero se corporizan en la discapacidad dado que la supresión de barreras gracias a los derechos civiles y la legislación contra la discriminación es claramente insuficiente.

Las personas con discapacidad a veces, aunque no siempre, requieren una ayuda extra.

Un aspecto importante en el que hay que insistir una y otra vez es que el propósito fundamental de la solidaridad debe ser dar a todas las personas la posibilidad de participar en todos los procesos generales de la sociedad.

Debe juzgarse valiosa en la medida en que libera a las personas en sus propias vidas. Con demasiada frecuencia, los sistemas de protección social han servido para atrapar a las personas con discapacidad.

Con esta base teórica creemos haber explicado las razones de este cambio de paradigma que se ha dado, tanto en el mundo como en nuestro País.

También, como ya hemos expresado, relataremos los avatares de la política gubernamental sobre la discapacidad a través de un recorrido sobre la Co.Na.Dis. como expresión organizativa de las Políticas Públicas sobre Discapacidad.

3. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DISCAPACIDAD

Si realizamos una mirada global, observamos –además del cambio de paradigma– que excepto, en los últimos tiempos, las políticas sobre discapacidad discurrían sobre tres ejes:

- Políticas erráticas, a partir de un corte transversal en el Estado, en el cual cada organismo estatal actuaba independiente y anárquicamente.
- Las políticas preventivas, que vinculan la discapacidad con la salud.
- El accionar de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, como centralizadora de las políticas en tal sentido.

3.1. Las políticas erráticas sobre discapacidad (1983/2004).

En términos globales y excluyendo el accionar de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) y del Ministerio de Salud, podemos observar que entre los años 1983/2004, el Estado reaccionaba con movimientos espasmódicos frente a esta problemática, generalmente respondiendo a impulsos del momento del funcionario de turno.

Según las situaciones hacían oídos sordos a los reclamos correspondientes aún cuando hubiera normativa que contemplaba u obligaba a otra actitud. Algunas áreas estaban ciegas a las dificultades que sufrían las personas con discapacidad, inclusive para ingresar a los mismos edificios donde se encontraban los organismos que los debían ayudar.

La incoordinación de movimientos entre distintos sectores en lo que al tema se refiere parecía ser una especie de falla motriz o funcional. Las actitudes inconsultas, evidenciaban comportamientos autistas. Sin duda, y en lo que a la discapacidad se refiere, podíamos decir que el Estado denotaba en su accionar, mas allá de las buenas intenciones, su propia discapacidad.

El Estado, usando una imagen propia del contexto analizado, era discapacitado motriz, mental, auditivo, visual, visceral y funcional para asistir adecuadamente a la población que sufría alguna discapacidad. Y era más que probable que este Estado discapacitado fuera un fiel reflejo de la sociedad, quien frente al problema reaccionaba y reacciona aún de forma similar. En tal sentido mencionaremos algunos ejemplos sucedidos en el Ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Teatro, refiriendo algunas acciones desarrolladas en forma autónoma, con independencia del éxito o no de las medidas.

3.1.1. Ministerio de Educación

El Programa de Desarrollo Laboral de Personas con Discapacidad, nació con la finalidad no expresa, de superar una carencia de personal. Se desarrolló en el Centro de Impresión del Ministerio y su objetivo actual es que los discapacitados se incorporen al mundo laboral. Comenzó en el año 1990 cuando se debía constituir el Centro de Impresión. Se incorporaron alumnos con discapacidad mental proveniente de Escuelas Especiales que entonces dependían del Ministerio de Educación. En un primer momento su presencia fue ad honorem, pero luego de dos o tres años se integró el régimen de pasantías. Actualmente se ofrecen 30 pasantías por un lapso de dos años. En el año 2000 se afianzó al buscar actuar concertadamente con el Ministerio de Trabajo, ONGs, Sindicatos y empresas privadas en busca de obtener una salida laboral para los pasantes. Ese proyecto se denominó Integrándonos para Integrar, y en el corto plazo tuvo resultados satisfactorios. Se debe resaltar que el Consejo Federal de Educación emitió en junio del 2000 la Resolución N° 137, con vistas a articular en las provincias programas similares al del Centro de Impresión.

3.1.2. Secretaría de Cultura

El 21 de octubre de 1997 la Secretaría de Cultura emitió la Resolución N° 1656 creando el Programa para la Integración de personas con discapacidad denominado "integrándonos por la cultura". Dentro de las medidas adoptadas en ese marco se encontraba la Resolución N° 1700 del 23 de octubre del mismo año, donde se disponía exceptuar a los discapacitados del pago de derechos de admisión en los espectáculos que organizara la Secretaría, como así también bonificar al acompañante del mismo en un cincuenta por ciento (50 %). Ese programa tuvo la vigencia limitada al funcionario de turno, no registrando continuidad su labor.

Por otra parte encontramos la Banda Sinfónica de Ciegos y el Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos Roberto Larimbe. El primero de ellos, también con un inicio casual, realizó su primera presentación en público el 15 de octubre de 1947, concierto que significó también el debut de la primera y única Banda Sinfónica de Ciegos en el mundo. La Banda cuenta actualmente con más de 50 músicos, y su repertorio actual excede las 250 obras. El extenso trabajo desarrollado por la Banda Sinfónica tiene un reconocimiento internacional, a tal punto que obtuvo el premio C.A.M.U otorgado por la UNESCO.

Por otra parte, Carlos Roberto Larimbe creó en 1947 el Coro Polifónico de Ciegos que hoy lleva su nombre. El mismo está conformado íntegramente por más de 70 personas discapacitadas visuales. Desde 1971 el Coro Polifónico Nacional de Ciegos solemniza las

celebraciones litúrgicas oficiales de la Catedral de Buenos Aires, a las que asiste el Presidente de la Nación, el cuerpo diplomático e invitados especiales. Cantó las misas celebradas en nuestro país por el Papa Juan Pablo II en 1982 y 1987. Su trayectoria ha sido reconocida con varios premios.

En resumidas cuentas, ambos organismos han permanecido en el tiempo a partir de más allá de las decisiones políticas de los funcionarios de turno, gracias a su producción artística y no como parte de una estrategia global en el tema de la discapacidad.

Cabe acotar que el sitio en internet de la Secretaría de Cultura dejó de contener una versión en audio para no videntes y disminuidos visuales, tal como funcionara hasta hace unos años.

3.1.3. Instituto Nacional Del Teatro

En el año 2002 el directorio del Instituto declaró el 21 de septiembre del Día Nacional del Teatro Integrado. Esta declaración pudo ser compatibilizada con la ley N° 25.346 del 25 de octubre de 2000, que declaraba el 3 de diciembre como Día Nacional de las Personas con Discapacidad, y establecía además que los organismos estatales responsables de la atención a las personas con discapacidad, elaborarán juntamente con los del área de Educación, Cultura y Deporte, los programas a implementarse en relación con dicha declaración. Se realizó además en el Teatro Nacional Cervantes un festival teatral organizado por el Instituto en el que se encontraban involucradas ONGs de discapacitados.

Todas estas medidas se tomaron en forma autónoma, a impulso de ONGs interesadas en el tema, pero omitiendo a otros organismo del Estado como la CoNADis.

3.2. Las Políticas Preventivas de Discapacidades

En relación con las discapacidades, y aún cuando en ocasiones los propios ejecutores no tienen conciencia de la vinculación de estas políticas con la problemática de la discapacidad, encontramos numerosas políticas que se han desarrollado en el período 1983-2009 con vistas a prevenir discapacidades, permanentes o pasajeras. Atento tratarse de políticas que buscan en definitiva evitar que la población sufra problemas de salud, en su gran mayoría las mismas están bajo la órbita del Ministerio de Salud. Los otros dos ámbitos en que se actúan al respecto, son la Agencia Nacional de Seguridad Vial (prevención de accidentes de tránsito) y el Ministerio de Trabajo (prevención de accidentes laborales).

3.2.1. Ministerio de Salud de la Nación

Entre las políticas para la prevención de discapacidades que se vienen desarrollando a lo largo del período bajo análisis, tenemos una primera clasificación que es la prevención de discapacidades producidas por enfermedades transmisibles y no transmisibles y las correspondientes a enfermedades congénitas. En ambos sentidos existen programas de larga data.

A. Prevención de discapacidades producidas por enfermedades transmisibles. Programa de Inmunizaciones.

- a. Calendarios nacionales de vacunación para enfermedades virales (contra la Poliomielitis, la Rubéola y el sarampión).
- b. Campaña Nacional de Vacunación para la Eliminación del Síndrome de Rubéola Congénita y Control de la Rubéola.
- c. Programa Nacional de Control de Lepra.

B. Prevención de discapacidades producidas por enfermedades no transmisibles.

Son aquellas que afectan a los sistemas musculoesquelético y cardiovascular. La prevención primaria es importante en relación con estas enfermedades, a menudo influenciadas por condiciones y modos de vida no saludables, pero es más importante el acceso a los servicios sanitarios y de bienestar social que presten el tratamiento y la rehabilitación eficaces y adecuados.

B.1. Programa CARMEN/CINDI (OPS/OMS).

Conjunto de Acciones implementadas a partir de fines de la década del 90 , para la Reducción Multifactorial de Enfermedades No Transmisibles (ENT), dentro de las que se encuentran las cardiovasculares, las cerebrovasculares, los cánceres, la diabetes mellitas, las respiratorias crónicas y, en otra medida, los accidentes y violencias.

B.2. Programa Nacional de Prevención y Control de la Diabetes Mellitus – PRONADIA aprobada por Resolución N° 301 del 16 de abril de 1999 del Ministerio de Salud y Acción Social.

B.3. Programa VER (Programa Nacional de Sanidad Ocular y Prevención de la Ceguera) creado por Resolución MS n°1250 del 22 de agosto de 2006 del Ministerio de Salud.

C. Prevención De Las Discapacidades Congénitas

C.1. Ley 23.413 (Octubre de 1986) Establece la prueba de rastreo para la detección precoz de la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito y la fibrosis quística o mucoviscidosis obligatoria en todas las maternidades y establecimientos asistenciales que tengan a su cuidado a niños recién nacidos.

C.2. Recomendaciones desde 1996 por el Ministerio de salud en torno a la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Infección Neonatal Precoz por *Estreptococo B Hemolítico del Grupo B (EGB)*,

C.3. Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia - Ley 25.415 (Abril De 2001)

C.4. Ley N° 25.630 (Julio de 2002) Prevención de Anemias y Malformaciones del Tubo Neural

C.5. Prevención de la Retinopatía del Prematuro: constituyó Grupo de trabajo colaborativo multicéntrico: por Resolución Secretarial del Ministerio de Salud de la Nación N° 26/03 en mayo de 2003, en la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil.

C.6. Ley N° 26.279 (Septiembre de 2007) Incorporando al listado de detección otras enfermedades genéticas y metabólicas además de fenilcetonuria e hipotiroidismo neonatal (fibrosis quística, galactocemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis); establece el tratamiento de los casos detectados y la posibilidad de inclusión de otras patologías.}

3.2.2. *Agencia Nacional de Seguridad Vial*

Tiene a su cargo el accionar a fin de evitar y prevenir los accidentes de Tránsito, enmarcándose las políticas al respecto en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2006/209.

3.2.3. *Ministerio de Trabajo*

El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene a su cargo las políticas en procura de prevenir los riesgos y accidentes laborales. Este organismo es una entidad autárquica, creada en el año 1996 por la Ley N° 24.557, en la órbita de la Secretaría de Seguridad Social del citado Ministerio. El marco normativo está dado por las siguientes leyes:

- Ley N° 19.587 (abril de 1972) de Higiene y Seguridad en el Trabajo
- Ley N° 24.557 (septiembre de 1995) de Riesgos del Trabajo

3.3. Las Políticas Centralizadas. La Co.Na.Dis.

La expresión por antonomasia de las políticas públicas se debiera dar en el órgano específico que un Gobierno dispone para su tratamiento. En tal sentido, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas es el organismo que, teóricamente, centraliza las políticas específicas al respecto. Podemos en tal sentido diferenciar tres épocas: una anterior a 1983, donde encontramos los antecedentes al mismo. Otra, entre 1983 y 2003, donde se observan grandes marchas y contramarchas, producto de que las buenas intenciones no eran suficientes para imponer un accionar. Por último, a partir de 2004, donde a partir del diseño del PLAN POLÍTICO DE ACCIONES INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2004-2007 y de una mayor fortaleza producto de su vinculación con el tercer sector (las ONGs) y de la mayor actividad del Consejo Federal.

3.3.1.- Los Antecedentes. El Período Anterior a 1983

El Servicio Nacional de Rehabilitación

El Servicio Nacional de Rehabilitación, fue creado en el año 1956 bajo el nombre de Comisión Nacional Permanente para la Rehabilitación de los Lisiados, dependiente del por entonces llamado Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

Dicha Comisión fue integrada por un grupo de destacados profesionales en la temática, entre los que podemos citar a los Doctores Alejandro Ceballos, Juan O. Tesone y Luís Alberto González; los cuales cumplieron su tarea “ad-honorem”.

El principal objetivo de la Comisión era la elaboración y ejecución de un programa de rehabilitación y capacitación para todo el país y la organización del Instituto Nacional de Rehabilitación.

En el año 1967 se aprobó la iniciativa de declarar el día 23 de marzo como “Día Nacional de la Rehabilitación”, en coincidencia con el día de la creación de la Comisión Nacional Permanente.

El Servicio Nacional de Rehabilitación es designado como tal, mediante el Decreto N° 1854 del año 1969, para el reemplazo de la Comisión Nacional Permanente, como un Organismo Autárquico.

Durante el paso de los diferentes gobiernos, el Servicio Nacional cambió de jerarquía y denominación en varias oportunidades. De hecho es un organismo generador de servicios para la persona con discapacidad, a nivel nacional.

En la actualidad el Servicio Nacional funciona como un organismo descentralizado dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación.

Una amplia gama de políticas referidas a la accesibilidad de los servicios y beneficios para la persona con discapacidad, actividades de capacitación a profesionales de todo el país, constante contacto con todas las jurisdicciones para el establecimiento de criterios comunes para la atención que respeten las regionalidades, y asesorando a ONG's, a la persona con discapacidad y a su familia, son parte de las principales acciones que hoy conforman la actualidad del Servicio Nacional.

Teniendo en cuenta la estructura normativa, organizacional y cultural del organismo, sus antecedentes y la experiencia, puede afirmarse que el Servicio Nacional de Rehabilitación se constituyó como un referente a nivel nacional, en lo que hace a la prevención, rehabilitación e integración de la persona con discapacidad.

La Ley N° 22.431

En cuanto al contexto legal, debemos inevitablemente tomar como punto de partida de la vasta normativa en relación con la discapacidad la sanción de la Ley N° 22.431 denominada Sistema de protección integral de los discapacitados, sancionada el 16 de marzo de 1981.

La ley, inscripta bajo el paradigma vigente en ese momento, instituye un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar la atención médica, su educación y su seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales.

3.3.2. *Período 1983-2003*

Actividad de la CoNADis en el período

Cabe consignar, a fin de referenciar el contexto, que la ley N° 22.431 fue reglamentada inicialmente por el decreto 498 del 1 de marzo de 1983, modificado a su vez por Decreto N° 140 del año 1985.

El primer cambio de paradigma, con respecto a políticas públicas orientadas a las personas con discapacidad, se da por una transformación en la concepción de esta población, más allá de la atención orientada específicamente a cuestiones de salud.

Si bien en ese entonces y aún hoy, la atención de la salud y rehabilitación de las personas con discapacidad es una cuestión prioritaria, en 1985, a través de la Resolución 9 del Ministerio de Salud, se crea la Comisión Nacional para las Personas Discapacitadas, en ámbito de esa Jurisdicción que, de esta manera, ya tenía bajo su órbita dos organismos: uno destinado específicamente a cuestiones de rehabilitación y otro, este antecedente de la actual Comisión Nacional Asesora, para coordinar la atención de otras cuestiones.

Sin embargo, esta Comisión Nacional, al estar dependiendo de esa cartera, se encontraba limitada en cuanto a su accionar más global.

Es así, como en el año 1987, se crea la actual Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, por Decreto N° 1101/87, con dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional.

Se procedió de acuerdo con las propuestas del Programa de Acción Mundial para las Personas Impedidas aprobado por Resolución n° 37/52 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recomienda la creación de un Órgano de ámbito nacional para examinar y vigilar las acciones relativas a la materia de los distintos Ministerios, otros Organismos públicos y las Organizaciones No Gubernamentales.

Tal órgano debería tener acceso a las instancias decisorias del más alto nivel. Su accionar gira en torno de los principios fundamentales de la Constitución Nacional, la legislación y los documentos internacionales en la materia, referidos a la igualdad, libertad y solidaridad, como principios inspiradores, para evitar la discriminación, favorecer la participación que garantiza la intervención, impulsar la descentralización que acerca la administración al ciudadano con discapacidad y la planificación, procurando eficiencia y agilidad para eliminar la duplicidad de funciones; alentar la animación comunitaria realizada a través de las comisiones, comités o consejos provinciales y municipales de discapacidad y el fomento de la iniciativa privada, destacando la importancia que tienen las organizaciones no gubernamentales de o para personas con discapacidad en su constante accionar.

La principal dificultad que se detecta en el tema políticas, es que la CoNADis, tal como su nombre lo indica, fue creada con características de organismo asesor y no ejecutor. Su accionar, aunque importante, no deja de estar teñido de esta característica limitante.

De todos modos y, como un reflejo de las políticas seguidas en relación con la discapacidad en los años bajo análisis, mencionaremos la participación de la CoNADis en los siguientes temas:

- a) Intervención en la elaboración de la Ley 23.874 (octubre de 1990) modificatoria de la Ley N° 23.413, de prueba de rastreo obligatoria para la detección temprana de la Fenilcetonuria e Hipotiroidismo, y participación en su reglamentación Decreto N° 1316 (agosto de 1994).

- b) Intervención en procura de la permanencia de los agentes públicos con discapacidad, durante los procesos de Reforma del Estado I y II. Los mismos fueron amparados en la Reforma del Estado I por el artículo N°. 74 del Decreto 2476/90. En la II Reforma del Estado, el Decreto N° 1231/96, incorporó como artículo 30 del Decreto N° 852/96 reglamentario de la Ley 24.629 la excepción a ser afectados por las medidas de racionalización del Estado a los agentes comprendidos en la Ley 22.431.
- c) Participación en la elaboración de la normativa específica de la Ley Nacional de Empleo N° 24.013 (diciembre de 1991), que facilita la incorporación al empleo de los trabajadores con discapacidad.
- d) Promoción de la sanción de la Ley N° 24.147 (octubre de 1992) de Talleres Protegidos de Producción, para los trabajadores cuya discapacidad no les permite obtener y conservar un empleo abierto.
- e) Intervención en la elaboración de la sanción y promulgación de las Leyes Nros. 24.183 (noviembre de 1992) y 24.844 (julio de 1997), modificatorias de la Ley 19.279, de franquicia para la adquisición de vehículos para personas con discapacidad y participó activamente en la elaboración de su Decreto Reglamentario N° 1313 de junio de 1993.
- f) Colaboración en la sanción de las Leyes Nros. 24.204 (1993) y 24.421 (1995), que crea el Servicio de Telefonía Pública y Domiciliaria para Personas Hipoacúsicas o con impedimento del habla, y participación en la elaboración del Reglamento de dicho Servicio, Resolución S.C. N° 26.878/96.
- g) Promovió la incorporación a la Constitución Nacional en el año 1994, del siguiente texto (artículo 75 inc. 23): "Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad".
- h) Requirió la incorporación, con jerarquía superior a las leyes, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que enumera el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
- i) Con la Declaración del Año de la Plena Integración de las Personas con Discapacidad, Decreto 236/94 impulsó el dictado del Decreto N° 1027/94, que aprobó el Plan de Acción del quinquenio, instruyendo a los

distintos Ministerios y Secretarías de la Presidencia de la Nación y a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a hacer efectivas las políticas relacionadas con las personas con discapacidad.

- j) Colaboró activamente en la sanción y promulgación de la Ley 24.308 (1994) modificatoria del art. 11 de la Ley 22.431, referida a la obligación por parte del Estado Nacional, entes descentralizados y autárquicos, las empresas mixtas y del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de otorgar en concesión, a personas con discapacidad, espacios para la instalación de pequeños comercios en toda sede administrativa. La misma fue reglamentada por el Decreto N° 795/95.
- k) Participó en la elaboración de la sanción y promulgación de la Ley 24.314 (1994) modificatoria de los arts. 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431, de Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida, participando además, con el Centro de Investigaciones de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en la elaboración del Decreto Reglamentario N° 914/97.
- l) Intervención en la sanción y promulgación de la Ley 24.393 (1994), que incorporó en la Ley de General de Migración y de Fomento de la Inmigración, el que establece que a las personas con discapacidad se le otorgará la misma categoría de admisión que la que se le otorgue a sus padres, hijos, cónyuges o representantes legales cuando éstos sean extranjeros.
- m) En el año 1995 culminó la elaboración del Proyecto de modificación de los Códigos de Edificación, de Planeamiento Urbano y de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires y lo propuso al Ejecutivo Municipal para su presentación ante el Concejo Deliberante.
- n) Propuso e impulsó la sanción de la Ley 24.657 (1996) de creación del Consejo Federal de Discapacidad.
- 1. ñ) Apoyatura a la sanción de la Ley 24.452 (1995) de Cheques, y participación en la elaboración de los Decretos Reglamentarios Nros. 153/96, 940/96, 553/97 y 961/98 y en la Decisión Administrativa N° 429/98.
- o) Integración de la Comisión para Hipoacúsicos o Impedidos del Habla creada por Resolución S.C. N° 1253/97, que funciona en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, para el seguimiento y proposición de reajuste a la Autoridad Regulatoria.

- p) Elaboración del Decreto N° 762/97 que crea el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
- q) Con la activa participación del Comité Asesor se elaboró e impulsó la sanción y promulgación de la Ley 24.901 (1997), del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, y participó en la elaboración del Decreto Reglamentario N° 1193/98, que armoniza dicha norma con el Decreto N° 762/97 que creó el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Asimismo se impulsó el dictado de la Resolución MSyAS N° 428/99 que aprueba el Nomenclador de Prestaciones del mencionado Sistema, e impulsó también, el dictado de la Resolución APE N° 400/99.
- r) Impulsó ante el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos e intervino en el dictado de la Resolución MEyOSP N° 1388/97, que establece un régimen de franquicias para la adquisición de elementos de rehabilitación y/o capacitación para personas con discapacidad cuya adquisición deba ser necesariamente efectuada en el exterior. Asimismo impulsó el dictado de la Resolución MEyOSP N° 953/99, que amplía la posibilidad de importar dichos elementos a las asociaciones civiles sin fines de lucro de/y para personas con discapacidad.
- s) Ante el dictado de las Resoluciones del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Nros. 1168/97 y 1206/97, que establecen la obligatoriedad de que toda película nacional deberá ser subtitulada en idioma nacional a fin posibilitar que las personas con discapacidad auditiva sean espectadoras de las mismas, la Comisión Nacional Asesora requirió del citado Instituto informe sobre el efectivo cumplimiento de las normas antes citadas, motivando tal requerimiento, el dictado de la Resolución INCAA N° 402/99 que establece un medio de control.
- t) Impulsó ante el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el dictado de la Resolución MEyOSP N° 1497/98 que aprueba el arancel 0% para la importación de equipos telefónicos de texto (TDD) para el uso por parte de personas hipoacúsicas y/o impedidas del habla.
- u) Requirió la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a fin de que contemple la situación de las personas con discapacidad beneficiarias o futuras beneficiarias de pensiones derivadas que se encontraban desarrollando una actividad laboral como parte de su

proceso de rehabilitación integral. A fin de dar solución a dicha situación el citado Ministerio dictó la resolución MTSS N° 426/98 que autoriza a las personas que se encuentran en tal condición, a trabajar en relación de dependencia bajo determinadas circunstancias, sin perder el beneficio de pensión derivada.

- v) En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1027/94, se dictaron las Resoluciones de la Secretaria de la Función Pública N° 67/98, 137/98 y 76/99, que crean el Sistema de Control de Aplicación del Art. 8° de la Ley N° 22.431 en dependencias de la Dirección Nacional del Servicio Civil de la Secretaría de la Función Pública.

Por otra parte, la Comisión Nacional Asesora ve realizadas sus funciones a partir del Decreto N° 984/92 que establece, entre otras funciones, la de formular consensuadamente con los Organismos nacionales y provinciales pertinentes y con la participación de las organizaciones privadas de y para personas con discapacidad, las políticas sobre discapacidad y proponer su aprobación por los órganos que correspondan.

El Decreto N° 129/95 en el marco de la modificación de la Constitución Nacional del año 1994 y de la correspondiente reestructuración organizativa del Estado Nacional, establece la incorporación de la CoNADis como dependencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

A partir del año 2002 pasa a depender nuevamente de la Presidencia de la Nación, pero ahora formando parte de la estructura organizativa del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, creado mediante Decreto 357 de ese año.

No podemos cerrar la revisión del período, con un hecho en la que el aporte y el requerimiento de la Comisión fue relevante, y que marcó un hito más allá de los errores o carencias del resultado. Nos referimos a lo realizado desde el INDEC para la identificación de hogares con discapacitados a través de una pregunta incorporada en el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2001 y en la ENDI - Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (2002-2003), complementaria del mismo. Todo un avance en materia de definir el universo receptor de las políticas sobre discapacidad.

3.3.3. Período 2004-2009

La gestión de la CoNADis en la actualidad.

En los últimos años, ya sea por el cambio de paradigma, por una mayor experiencia en el organismo o por el mayor peso específico de las organizaciones del tercer sector que

estaban interesadas en su buen funcionamiento, la CoNADis ha ido creciendo en la posibilidad de determinar políticas positivas a favor de las personas con discapacidad. Es cierto que el camino a recorrer es largo aún, máxime cuando más allá de cuestiones puntuales la problemática no pasa en el día de hoy por la normativa en el tema, la cual pareciera ser suficiente, sino más bien con su ejecución.

Respecto del accionar de la CoNaDis en este período, debemos resaltar que elaboró un PLAN POLÍTICO DE ACCIONES INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2004-2007. Este Plan procuró lograr para las personas con discapacidad el máximo de autonomía e independencia personal además de su presencia activa en la vida familiar, económica y social. La estructura del plan macro era en base a cuatro planes sectoriales con un eje transversal que los articula, a saber:

1. Integración a la Comunidad
2. Salud
3. Educación
4. Integración Laboral

Este Plan Político incorpora a su vez el Plan Nacional de Accesibilidad que la Comisión Nacional Asesora llevaba adelante junto con el Consejo Federal de Discapacidad.

Es de destacar que también participa con carácter vinculante en la elaboración de iniciativas que, sobre la temática de la discapacidad, proyecten las áreas competentes como así también en la coordinación de labores que desarrollen sobre la materia las entidades públicas y privadas de todo el país, proponiendo además las medidas tendientes a una eficaz articulación de tales labores.

Asimismo, evalúa el cumplimiento de la Ley 22.431 y demás instrumentos legales y reglamentarios relacionados con las personas con discapacidad y analiza la conveniencia de sancionar normas complementarias o modificatorias elaborando las propuestas respectivas con intervención de los órganos competentes.

También tiene entre sus funciones la de requerir de los Organismos Gubernamentales la información necesaria para el cumplimiento de su misión; impulsar la constitución de fondos especiales con el fin de atender la integración de personas con discapacidad y desarrollar, a tal efecto, acciones entre organizaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales; participar con los organismos correspondientes en el estudio de las necesidades de recursos humanos especializados en la asistencia de las personas con discapacidad y formular pautas para su formación y perfeccionamiento; articular el desarrollo de la temática de las personas con discapacidad, con otros programas de bienestar o desarrollo de la comunidad; fomentar y desarrollar campañas permanentes

de información, concientización y motivación comunitaria, propias o conjuntas; estimular, apoyar y facilitar proyectos y trabajos de investigación relacionados con el área, etc.

Cabe recordar que la Comisión Nacional Asesora está integrada por un Presidente, un Directorio, un Comité Asesor (integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil) y un Comité Técnico (integrado por representantes de organismos y jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo Nacional).

El Comité Asesor reúne a los representantes de las asociaciones de personas con distinto tipo de discapacidad, lo que asegura la presencia de los propios interesados y la exposición y defensa de sus intereses, en un intercambio fluido.

A través del Comité Técnico se articula la tarea con las áreas específicas de gobierno impidiendo así el trato segregado. La interrelación, de estos Comités permite lograr un real aprovechamiento de los recursos como así también su mejor distribución para alcanzar las metas propuestas.

A lo largo de todo el país y con el correr de los años se han ido organizando los Consejos o Comisiones Provinciales de Discapacidad que replican el modelo descripto.

Su accionar se afianza con la constitución del Consejo Federal de Discapacidad, creado por Ley 24.657, procurando extender las políticas en la materia a todas las personas con discapacidad, en cualquier lugar del país.

De tal suerte, la Comisión Nacional Asesora, con dependencia del Gobierno Nacional y con su correlato en los ámbitos provinciales y municipales, implica una estructura que no aumenta el gasto público ya que se implementa con reducido personal técnico y administrativo, que extiende su acción en la articulación con las áreas gubernamentales – educación, trabajo, desarrollo social, etc.- de que se trate y con las no gubernamentales.

Como expresáramos anteriormente, en los últimos tiempos, se produjo un significativo avance del llamado Tercer Sector, en la toma de decisiones. Sus representantes en el área de la discapacidad integran con carácter permanente el Comité Coordinador de Proyectos y Programas de la Ley 24452 – Decreto N° 153/97 (ley de Cheques), y también el Directorio del Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (Ley 24901- Decreto N° 1193/98).

Así mismo, un representante del Sector no gubernamental ejerce la Vicepresidencia del Consejo Federal de Discapacidad.

La CoNaDis además coordina los siguientes programas:

- Programa de Apoyo a la Inserción Ocupacional de las Personas con Discapacidad.
- Programa para la Cobertura de las Personas Discapacitadas Carenciadas en el Sistema Único de Prestaciones Básicas.

- Programa de Apoyo a Centros y Servicios de Rehabilitación Programa de Promoción de la Integración a la Escolaridad Común Programa de Transporte Institucional
- Programa de Acción Conjunta de Sistemas Alternativos de Contención Social
- Programa de Ayuda a Personas con necesidades Especiales en Situaciones de Catástrofes.

El Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, garantiza la universalidad de la atención de las mismas mediante la integración de políticas, de recursos institucionales y económicos afectados a la temática.

Las prestaciones se financian según la pertenencia de la persona beneficiaria: por el Fondo Solidario de Redistribución (Ley 23.661), con los recursos establecidos en la Ley 19.032 y sus modificatorias, con recursos provenientes de la Ley 24.241, y –en el caso de las personas con discapacidad carenciadas- con fondos provenientes de la Ley de Cheques.

Las provincias ingresan al Sistema mediante Convenios de adhesión.

A la fecha ocho provincias se han incorporado al mismo: Santa Cruz, Córdoba, Tucumán, Catamarca, Formosa, La Rioja, Chubut y Chaco.

Están a la firma además, convenios con Misiones y Santa Fe. En cuanto a otras acciones desarrolladas, es notoria la reducción de barreras culturales y físicas que se oponen a la integración plena, lograda en los últimos tiempos.

A grandes rasgos, puede decirse que estas gestiones se orientaron siempre a generar acceso a la educación común –cuando esto es posible-, al empleo –competitivo o protegido-, a la salud y a la rehabilitación integral, al deporte y a la recreación, al transporte público y privado, etc.

El desenvolvimiento de la Comisión Nacional Asesora, se ha desarrollado también a nivel internacional, estableciendo firmes espacios de cooperación, donde los beneficios obtenidos mediante la coordinación de tareas y la articulación de sectores se extienden a otros países de habla hispana.

En este sentido cabe resaltar aquí, la conformación de la CICONADI (Confederación Iberoamericana de Comités, Consejos y Comisiones Nacionales de Discapacidad), en el mes de junio de 1995, en concurso con el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, de España y 19 países de Iberoamérica; la activa participación en la RIICOTEC (Red Iberoamericana de Cooperación Técnica), en respuesta a la convocatoria del IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales), con la representación del Cono Sur.

A esto se suma la firma del llamado Acuerdo de Salta, mediante el cual Argentina, a través de esta Comisión Nacional Asesora promovió el encuentro de representantes gubernamentales y no gubernamentales de Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay para favorecer un accionar coordinado y trabajar conjuntamente en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas para el sector.

Lo expuesto pone de manifiesto –aunque muy sintéticamente- los avances producidos en el área de atención de las personas con discapacidad en los últimos años.

Cabe reseñar además la existencia del Comité Técnico y del Comité Asesor. En cuanto al Comité Técnico mencionado ut supra, el mismo se reúne todos los primeros jueves del mes, con la participación de representantes de los siguientes Organismos:

- Ministerio de Economía y Producción
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Salud y Ambiente (Superintendencia de Servicios de Salud)
- Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Justicia y DD.HH
- ANSES
- Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR)
- Secretaria de Deportes
- Subsecretaria de Gabinete y Gestión Pública

Además participan representantes en calidad de consultores de la Comisión de Discapacidad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y del Poder Judicial de la Nación.

En cuanto al Comité Asesor, el mismo se reúne una vez por mes, para fijar sus líneas de acción siendo su accionar un importante respaldo para la actividad de la CoNaDis.

El Consejo Federal de Discapacidad

Hemos mencionado anteriormente la participación de la CoNaDis, en el Consejo Federal de Discapacidad. El mismo fue creado por Ley N° 24.657/96 y se constituyó por primera vez el 12 de Noviembre de 1998, teniendo en estos últimos años una importante actividad en procura de replicar y activar en todo el país el modelo vigente a nivel nacional, en beneficio de las personas con discapacidad.

El Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad

Con motivo de la sanción de la Ley N° 24.452 se destinó un fondo exclusivo para programas y proyectos destinados a personas con discapacidad, integrado por el conjunto de multas impuestas a cuentacorrentistas por incumplimiento a lo dispuesto en dicha norma.

Este fondo sufrió significativas modificaciones: fue suprimido por la Ley N° 25.413 y con la sanción de su similar N° 25.730, se volvió a conformar dicho fondo.

Esta última ley fue reglamentada mediante el Decreto N° 1277 de fecha 23 de mayo de 2003 (T.O.), que estableció la composición del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, y le asignó –entre otras- las funciones de evaluar, seleccionar y aprobar los programas y proyectos para personas con discapacidad, mencionados en la Ley N° 25.730 y su reglamentación.

El Comité Coordinador actualmente está integrado por Un (1) representante titular y Un (1) representante alterno por cada uno de los siguientes organismos:

- Ministerio de Salud y Ambiente
- Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
- Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
- Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación,

Dos (2) representantes del Comité Asesor de la Comisión Nacional antes mencionada y Dos (2) representantes del Consejo Federal de Discapacidad.

Los programas en vigencia, son:

Accesibilidad

- Programa de Apoyo para Accesibilidad a Provincias y Municipios;
- Sub Programa de Apoyo para Accesibilidad. Circuitos Accesibles para Pequeñas Localidades.

Desarrollo Social

- Programa de Alternativas de Contención Social;
- Programa de Transporte Institucional.

Salud

- Banco Provincial de Ayudas Técnicas: Programa de Creación o Ampliación del Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas .
- Capacitación: Programa de Capacitación de Recursos Humanos en Rehabilitación y Formación de Médicos Especialistas.
- Redes de Rehabilitación: Programa de Fortalecimiento de las Redes de Rehabilitación .
- Taller Ortesis y Prótesis: Programa de Impulso al Desarrollo de Talleres de Ortesis y Prótesis Talleres Protegidos
- Programa de Talleres Protegidos.

Programa para Personas Físicas

- Programa de Ayudas Personales y Viviendas .

Trabajo

- Programa de Microemprendimientos ;
- Autoempleo.
- Programa Productivo Tecnológico y Social de Fabricación de Ayudas Técnicas
- Proyecto para el Programa Productivo Tecnológico y Social de Fabricación de Ayudas Técnicas .

4. MENCIONES CONSTITUCIONALES SOBRE LA DISCAPACIDAD

Si tenemos en cuenta que el primer elemento que permite definir las políticas de un Estado es el sustento normativo principal, en nuestro caso, la normativa constitucional, por ello nos resulta imprescindible citar las menciones constitucionales sobre la temática.

Debemos considerar entonces, que en 1994 se puso en marcha la Reforma de la Constitución a través de la Convención Constituyente que sesionó en la ciudad de Santa Fe y que en la nueva redacción de la Constitución Nacional se hizo especial énfasis a la temática de la discapacidad.

La Nación desde su Constitución se “auto-obliga” a respetar derechos personalísimos como son la vida, la salud, la educación, la dignidad, la igualdad, la integridad física, y es el Estado el encargado de remover la mayoría de aquellos obstáculos, por sí o por sus agentes.

En atención a esto es que en nuestra Carta Magna se encuentran, además, incorporados con rango constitucional una serie de Tratados Internacionales que tienen como objetivo dignificar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. A esto se suman muchas otras normas similares, por lo tanto, en nuestro país, no es la escasez de normas el obstáculo para la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Lejos de lo que podría suponerse, contamos en nuestro derecho positivo con un gran número de normas que plasman un ordenamiento coherente y armónico que de cumplirse y efectivizarse, harían más llevadero el desenvolvimiento cotidiano de los discapacitados.

De allí que proponemos esta mirada sobre las constituciones, ya que los cambios promovidos son un claro ejemplo de cómo evolucionó el tratamiento de la Discapacidad desde las propias constituciones, tanto la nacional como las provinciales.

4.1. Constitución Nacional

La primera mención la encontramos en el artículo 14 bis, en donde se habla sobre los derechos de los trabajadores², esta mención sobre una cobertura integral e irrenunciable a cargo de la seguridad social, es un concepto que ha servido de base para que se realicen y/o sustenten los pedidos que en tal sentido se presentan a la justicia.

También se deja constancia de la igualdad intrínseca que propone la ley para todos los habitantes y deja sentada la idea de que la idoneidad es la única característica habilitada para plantear una no admisibilidad frente a un empleo³.

Se establece el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, en esto se funda el derecho a la accesibilidad y a contar con todas aquellas ayudas y compensaciones necesarias para permitir el desarrollo de todas las personas que habitan esta Nación⁴.

En lo que respecta a la manera en que pueden reclamarse estos derechos, al final del Capítulo Segundo –Nuevos Derechos y Garantías– se menciona el derecho de toda persona a interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas.

También este derecho puede interponerse contra particulares cuando lesionen, restrinjan, alteren o amenacen –con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta– derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.

² Artículo N° 14 bis – Constitución Nacional

³ Artículo N° 16 – Constitución Nacional

⁴ Artículo N° 41 – Constitución Nacional

Esta facultad de interponer la acción de amparo también puede usarse contra cualquier forma de discriminación⁵.

En línea con estos conceptos ligados a los mecanismos de reclamo y defensa de intereses, se establece la figura del Defensor del Pueblo, como un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación.

En el Capítulo IV, Atribuciones del Congreso, en el artículo N° 75, inciso 23, se mencionan en forma explícita como una de las tantas atribuciones que posee el Poder Legislativo, el poder legislar y promover leyes y medidas de acción para garantizar la igualdad de oportunidades, trato y derechos ante la ley⁶.

A continuación veremos como se expresa esta temática en las diferentes jurisdicciones en que se divide el país. Hacemos una mención especial y separada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de su particular status.

4.2. Constituciones Locales

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ya desde el mismo preámbulo se hace mención, en forma implícita, de la vocación de igualdad que existe en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires⁷ y señala, en forma específica la no admisión de cualquier discriminación que tuviera fundamento – entre otras causas– en caracteres físicos o en la condición psicofísica de las personas⁸.

La Ciudad también ha pensado en las condiciones que deben cumplirse cuando se trate de detenciones de personas con necesidades especiales destacándose que deben asegurarse medidas especiales en atención a su condición⁹.

En lo pertinente al área de la Salud, en su Artículo N° 20, asegura que el presupuesto en dicha área debe ejecutar acciones de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación; y que las mismas deben ser gratuitas y realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad¹⁰.

De una manera más explícita la Constitución de la Ciudad Autónoma establece la obligación de la Legislatura de sancionar una Ley Básica de Salud, en la cual garantiza la

⁵ Artículo N° 43 – Constitución Nacional

⁶ Artículo N° 75 Inc. 23 – Constitución Nacional

⁷ Preámbulo - Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

⁸ Art.Nº: 11 - Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

⁹ Art. N° 13, inc.7 - Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁰ Art.Nº: 20 – 2º párrafo - Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

prevención de la discapacidad y la atención integral de las personas con necesidades especiales¹¹.

Otro de los aspectos importantes en donde se resalta esta voluntad de no discriminación y de facilitamiento del acceso, se puede ver en lo que respecta al área de Educación¹², y esta pauta también debe ser contemplada por las personas privadas y públicas no estatales que presten servicios educativos¹³.

En el capítulo que reserva para el tema del “Habitat”, la Constitución de la Ciudad, prevé que deberá resolverse en forma progresiva el déficit habitacional estableciendo un breve orden de prioridad donde menciona específicamente a las personas con necesidades especiales de escasos recursos¹⁴.

En el tema Deportes, también hace mención a la necesidad de sostener centros deportivos para todo tipo de personas¹⁵.

En el Capítulo decimotercero, Artículo N° 42, esta Constitución se adentra de lleno en la temática de la discapacidad, al respecto cabe señalar que establece una garantía expresa del derecho a la plena integración, información y equiparación de oportunidades.

También menciona la obligación de desarrollar un hábitat libre de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte¹⁶.

Respecto de la relación de la discapacidad con el empleo público, la Constitución establece un cupo del 5% respecto de la planta de personal, pero determina que el mismo debe conformarse de manera gradual y con arreglo a las leyes que posteriormente determinen el modo concreto en que este punto debe ponerse en práctica¹⁷.

En lo que corresponde a la Legislatura de la Ciudad, la Constitución establece entre sus derechos el de legislar y promover medidas que garanticen la igualdad para las personas con necesidades especiales¹⁸.

Por último en lo que respecta a este tema, en el Artículo N°: 137, se establece la creación de la figura de la “Defensoría del Pueblo”, al que se le da como mandato, entre otros aspectos, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución¹⁹.

¹¹ Art.N°: 21 – Inc.7 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹² Art.N°: 24 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹³ Art.N°: 25 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁴ Art.N°: 31 – Inc.1 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁵ Art.N°: 33 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁶ Art.N°: 42 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁷ Art.N°: 43 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁸ Art.N°: 80 – Inc.7 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁹ Art.N°: 137 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires no es tan completa como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero igualmente hace mención a la discapacidad.

El primer punto que señala es la no admisión de distinciones, discriminaciones o privilegios por razones de enfermedades de riesgo o características físicas. También establece el deber de la Provincia de promover un desarrollo integral que garantice la igualdad de oportunidades para todas las personas²⁰.

En el Artículo 36, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que la Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos de cualquier naturaleza que puedan impedir el efectivo ejercicio de los derechos y garantías consagrados en dicha constitución. También enumera lo que ella misma designa como “derechos sociales”, entre los cuales se encuentran los referidos a las personas con discapacidad²¹.

En la Sección Décima (Disposiciones Transitorias) se establece una suerte de promesa de que deberá elaborarse una norma que tratará el tema de las barreras arquitectónicas para las construcciones con acceso al público²².

Provincia de Catamarca

La primera mención al tema de la discapacidad que se puede encontrar en la Constitución de la Provincia de Catamarca está en el Artículo N°: 44 pero esta expresada en forma implícita²³ ya que debería rastrearse en el concepto de no discriminación.

De una manera más frontal, este tema se ubica dentro de los llamados “Derechos Sociales Generales”. En este artículo (Artículo N° 65) se hace mención a la discapacidad de una manera poco común, se los menciona como “disfuncionados”. Una ley especial regula la problemática integral de las disfunciones limitantes y asegura la operatividad de los derechos reconocidos en este artículo.²⁴

En lo que se refiere a la estructura educativa, se menciona que el Consejo General de Educación tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de la política educativa para disfuncionados²⁵.

²⁰ Art.N°: 11 – 2° y 3° párrafos – Constitución de la Provincia de Buenos Aires

²¹ Art.N°: 36 – Inc.5° – Constitución de la Provincia de Buenos Aires

²² Art.N°: 212 – Constitución de la Provincia de Buenos Aires

²³ Art.N°: 44 – Constitución de la Provincia de Catamarca

²⁴ Art.N°: 65 – Inc.VI – Constitución de la Provincia de Catamarca

²⁵ Art.N°: 277 – Inc. 1 – Constitución de la Provincia de Catamarca

Provincia del Chaco

Esta Constitución afirma la igualdad de todos los habitantes de la provincia ante la ley y asegura la igualdad de oportunidades señalando que, así como cada uno tiene el deber de contribuir al bienestar común, también tiene el derecho de participar de los beneficios del mismo²⁶.

En el Capítulo III, sobre los Derechos Sociales, en su Artículo 35, inciso 5°, se hace mención expresa de los derechos que poseen las personas con discapacidad: Educación temprana y especializada, terapia rehabilitadora, y la incorporación a la actividad laboral y social en función de sus capacidades²⁷.

También se establece el deber de la Provincia de promover, proteger y reparar la salud de sus habitantes y dictar la legislación que establezca y asegure estos derechos²⁸.

Provincia de Chubut

La Constitución de la Provincia de Chubut establece la libertad e igualdad para todas las personas que habiten su suelo no permitiendo que se establezcan diferencias ni privilegios enmascarados en cualquier tipo de razón²⁹.

En el artículo siguiente, inscripto bajo el título de “No Discriminación”, se señalan que las diferencias surgidas en función del sexo, la edad o la discapacidad no constituyen factores de discriminación y también destaca que de las características emergentes de dichas diferencias el Estado es garante del debido respeto³⁰.

También se establece la nulidad y la imposibilidad de aplicación por parte de los jueces de toda ley, decreto u ordenanza que restrinja el ejercicio de las libertades y derechos que reconoce esa Constitución³¹.

Más adelante, se menciona en un articulado específicamente dedicado a los derechos concernientes a la discapacidad, como ser: prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social y laboral y la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto a sus deberes de solidaridad evitando toda discriminación³².

²⁶ Art.Nº: 8 – Constitución de la Provincia del Chaco

²⁷ Art.Nº: 35 – Inc. 5° – Constitución de la Provincia del Chaco

²⁸ Art.Nº: 36 – Constitución de la Provincia del Chaco

²⁹ Art.Nº: 6 – Constitución de la Provincia de Chubut

³⁰ Art.Nº: 7 – Constitución de la Provincia de Chubut

³¹ Art.Nº: 10 – Constitución de la Provincia de Chubut

³² Art.Nº: 30 – Constitución de la Provincia de Chubut

Cabe señalar que en esta Constitución, de un modo atípico, también legisla sobre la especial protección que se le asigna a lo que sería el reverso de la discapacidad, es decir aquellos casos de personas con altos niveles de capacidad o talentos, a ellos se consigna que el Estado deberá posibilitar, en forma activa, el desarrollo de estas personas y para ello facilitará la educación correspondiente³³.

En su artículo N°: 80 determina la obligación del Estado de remover todos los obstáculos que impidan el pleno desarrollo de las personas³⁴.

Continuando con los especiales recaudos que esta Constitución impone, se crea el Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces, el cual tendrá, entre otras obligaciones, el deber de defender en juicio a los declarados incapaces³⁵.

Provincia de Córdoba

En la Provincia de Córdoba, ya desde su Preámbulo se establece la reafirmación de la igualdad de las personas como así también se garantiza el ejercicio de sus derechos³⁶.

La Constitución, en su articulado hace mención expresa de la igualdad ante la ley y de la no admisión de ningún tipo de discriminación³⁷.

Esto se ve reforzado por lo expuesto en el capítulo referente a los Derechos Personales³⁸. Todos estos conceptos referidos a la igualdad y no discriminación se ven claramente reforzados y explícitamente resguardados en el Artículo N° 27³⁹.

Provincia de Corrientes

La primera mención se verifica en el Capítulo VII “De los Derechos de las personas con discapacidad”⁴⁰ allí se establece que el Estado asegura y garantiza a las personas con discapacidad el pleno goce y ejercicio de sus derechos reconocidos tanto por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, las leyes y la presente constitución.

³³ Art.N°: 31 – Constitución de la Provincia de Chubut

³⁴ Art.N°: 80 – Constitución de la Provincia de Chubut

³⁵ Art.N°: 196 – Constitución de la Provincia de Chubut

³⁶ Preámbulo – Constitución de la Provincia de Córdoba

³⁷ Art.N°: 7 – Constitución de la Provincia de Córdoba

³⁸ Art.N°: 19 – Inc. 3° – Constitución de la Provincia de Córdoba

³⁹ Art.N°: 27 – Constitución de la Provincia de Córdoba

⁴⁰ Art.N°: 44 – Constitución de la Provincia de Corrientes

Provincia de Entre Ríos

La constitución de la provincia fue reformada durante el año 2008, en esta nueva redacción se asegura la igualdad de oportunidades⁴¹ a las personas con discapacidad y a sus familias, la atención integral de la salud entre otros beneficios.

En el segundo párrafo del mencionado artículo (Artículo N° 21) se establece que el Instituto Provincial de la Discapacidad, en colaboración con las familias y las organizaciones intermedias, elabora y ejecuta políticas de equidad, protección, promoción, educación y difusión de los derechos de las personas con discapacidad y de los deberes sociales para con ellas.

En los capítulos reservados al “Régimen Municipal” se establece que el municipio debe instrumentar políticas públicas para la integración de personas con discapacidad⁴².

Provincia de Formosa

Establece la igualdad para todos los habitantes de la Provincia y prohíbe toda discriminación, aunque es necesario hacer notar que entre las razones que señala como causas prohibitivas de discriminación no se encuentra nombrada a la discapacidad⁴³.

Respecto de la discapacidad se hace una mención expresa en su Capítulo IV que trata sobre el Régimen Social, allí se encuentra el Artículo N°: 72 donde se señalan los derechos de los discapacitados⁴⁴.

También hay que destacar que cuando la Constitución de la Provincia de Formosa habla sobre las políticas educativas que se deben llevar adelante en la provincia, determina que deben preverse acciones que aseguren la igualdad de oportunidades y que deben contarse con instalaciones adecuadas para los discapacitados⁴⁵.

Provincia de Jujuy

Independientemente de la declaración de igualdad que se establece en el preámbulo, la Constitución de la Provincia de Jujuy en su Artículo N° 25 establece la igualdad de los habitantes⁴⁶.

⁴¹ Art.N°: 21 – Constitución de la Provincia de Entre Ríos

⁴² Art.N°: 240, Inc. 15 Constitución de la Provincia de Entre Ríos

⁴³ Art.N°: 9 – Constitución de la Provincia de Formosa

⁴⁴ Art.N°: 72 – Constitución de la Provincia de Formosa

⁴⁵ Art.N°: 93 – Inc. 4° – Constitución de la Provincia de Formosa

⁴⁶ Art.N°: 25 – Constitución de la Provincia de Jujuy

También se señala, en el Artículo N° 48, la garantía de asistencia integral a los discapacitados y se destaca que el Estado debe garantizar los medios para lograr la integración de los mismos a la Sociedad⁴⁷.

En el terreno de las políticas de salud, la Constitución hace una clara mención respecto de las responsabilidades del Estado en cuanto a la promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud de sus habitantes⁴⁸.

Provincia de La Pampa

La Constitución de la Provincia de la Pampa realiza en su Artículo N°: 6 una fuerte defensa de la igualdad de todos sus habitantes y resalta que no admite ningún tipo de discriminación por condiciones físicas⁴⁹.

Esta es la única mención que se realiza en el texto constitucional acerca de las personas con necesidades especiales.

Provincia de La Rioja

La Provincia de la Rioja establece desde su preámbulo una clara definición respecto de la igualdad de todas las personas, también se propone promover la creación de una sociedad justa, libre y exenta de toda discriminación⁵⁰, este planteo se ve reforzado en el resto del texto constitucional, el cual le dedica un artículo específico sobre la igualdad⁵¹.

También tiene un artículo para las personas discapacitadas, en él la Provincia se obliga a promover políticas de prevención, protección, rehabilitación e integración de aquellas personas con discapacidad⁵².

En lo que respecta a la temática de la Educación, también se resalta que el Estado Provincial asegurará la igualdad de oportunidades para todas las personas⁵³.

En relación con las políticas de salud pública, la Constitución establece como responsabilidad del Estado asegurar la salud como derecho fundamental de las personas⁵⁴.

Por último en el capítulo reservado para normar las actividades del Ministerio Público de la Defensa, se establece que el Defensor General, los Defensores, Asesores de Menores e Incapaces, funcionarios y aquellos que la ley determine, tiene por funciones, además de

⁴⁷ Art.N°: 48 – Constitución de la Provincia de Jujuy

⁴⁸ Art.N°: 69 – Constitución de la Provincia de Jujuy

⁴⁹ Art.N°: 6 – Constitución de la Provincia de La Pampa

⁵⁰ Preámbulo – Constitución de la Provincia de La Rioja

⁵¹ Art.N°: 21 – Constitución de la Provincia de La Rioja

⁵² Art.N°: 39 – Constitución de la Provincia de La Rioja

⁵³ Art.N°: 54 – Constitución de la Provincia de La Rioja

⁵⁴ Art.N°: 59 – Constitución de la Provincia de La Rioja

las otras que por ley se establezcan, realizar a todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos, promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores discriminados, de los niños y de los incapaces, la debida asistencia de cada una de las partes con intereses contrapuestos, de los niños o de los discapacitados⁵⁵.

Provincia de Mendoza

En su Artículo N° 7, se proclama la igualdad de todos sus habitantes⁵⁶.

También se hace una mención especial en el Artículo N° 214, que está inserto en el Capítulo Único sobre Educación e Instrucción Pública, allí se establece que “La enseñanza especial deberá referir principalmente a las industrias agrícolas, fabril, y de artes y oficios”⁵⁷.

Más allá de lo expuesto, no figura ninguna otra mención al tema de la discapacidad en su texto Constitucional.

Provincia de Misiones

Al igual que muchas otras constituciones, la Constitución de la Provincia de Misiones establece en sus primeros artículos el concepto de igualdad para todas las personas⁵⁸ y luego señala que la Ley debe asegurar el amparo a la incapacidad⁵⁹, más allá de estas menciones, la Constitución no vuelve a tocar el tema de la discapacidad.

Provincia del Neuquén

La Provincia del Neuquén establece la plena igualdad para todos sus habitantes, también señala que deben removerse los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de las personas⁶⁰.

Dentro del Capítulo reservado a las garantías sociales, esta Constitución consigna que la Provincia deberá asegurar a todo trabajador un conjunto de derechos, entre ellos el de la rehabilitación integral de los incapacitados⁶¹.

También se establece que el Estado garantiza el pleno desarrollo e integración económica y sociocultural de las personas discapacitadas, sancionando todo acto u omisión

⁵⁵ Art.Nº: 150 - Constitución de la Provincia de La Rioja

⁵⁶ Art.Nº: 7 – Constitución de la Provincia de Mendoza

⁵⁷ Art.Nº: 214 - Constitución de la Provincia de Mendoza

⁵⁸ Art.Nº: 9 – Constitución de la Provincia de Misiones

⁵⁹ Art.Nº: 37 – Inc. 2 – Constitución de la Provincia de Misiones

⁶⁰ Art.Nº: 22 – Constitución de la Provincia de Neuquén

discriminatorio. Promueve y consolida el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, comunicacionales, sociales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo⁶².

En un artículo enmarcado en la parte relativa a los temas concernientes a la temática de la Educación, se establece que el Estado garantizará el derecho de las personas discapacitadas o con otras necesidades educativas, especiales a educarse y promueve su integración en todos los niveles⁶³.

Provincia de Río Negro

En su Preámbulo la Constitución de la Provincia de Río Negro hace su primera declaración sobre la igualdad de todas las personas. Más adelante, realiza una mayor aclaración acerca de cómo deben aplicarse estos derechos y garantías⁶⁴.

Como muchas otras, esta Constitución tiene un artículo especial para el tema de la discapacidad donde se establece –entre otros puntos– el deber de protección, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e inserción en la vida social⁶⁵.

En lo que se refiere a la Política Educativa y su relación con la discapacidad, esta Constitución señala como uno de sus principios la accesibilidad para todas las personas y se asegura la atención a la educación especial⁶⁶.

Provincia de Salta

En su preámbulo, la Constitución de la Provincia de Salta, afirma los valores de igualdad, solidaridad y manifiesta el deber del Estado de proteger la salud de los habitantes y, entre otros derechos, asegurar el acceso a la educación y la cultura⁶⁷.

Más adelante, esta Constitución establece el principio de igualdad de las personas por sobre toda otra condición o circunstancia personal o social, también establece la obligación de los poderes públicos de asegurar las condiciones para que esta “igualdad” no quede como un hecho meramente declarativo y que tenga efectos reales⁶⁸.

⁶¹ Art.Nº: 38 – Inc. o) – Constitución de la Provincia de Neuquén

⁶² Art.Nº: 50 - Constitución de la Provincia de Neuquén

⁶³ Art.Nº: 122 – Constitución de la Provincia de Neuquén

⁶⁴ Art.Nº: 14 – Constitución de la Provincia de Río Negro

⁶⁵ Art.Nº: 36 – Constitución de la Provincia de Río Negro

⁶⁶ Art.Nº: 63 – Inc. 2 y 8 – Constitución de la Provincia de Río Negro

⁶⁷ Preámbulo – Constitución de la Provincia de Salta

⁶⁸ Art.Nº: 13 – Constitución de la Provincia de Salta

La Constitución determina que los poderes públicos deben brindar a los discapacitados la asistencia necesaria aclarando que debe ponerse énfasis en la rehabilitación y en el cumplimiento de las instancias educativas especializadas⁶⁹.

En lo referente al tema de la Salud, establece que el deben cubrirse las necesidades esenciales de las personas⁷⁰, y respecto de la Educación se señala que el Estado sostiene la educación especial⁷¹.

Provincia de San Juan

En el Capítulo II, dedicado a los Derechos Individuales, la Constitución de la Provincia de San Juan establece que se castigará severamente a toda persona que no respete a sus semejantes y les produzca algún tipo de humillación por cualquier causa⁷².

En la misma línea temática la Constitución establece que el Estado debe asegurar la progresiva eliminación de problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afecten a las personas⁷³.

Con referencia al tema de la discapacidad, la Constitución posee un artículo dedicado al tema, en él se obliga al Estado a instrumentar políticas de prevención, protección, rehabilitación e integración, también establece la necesidad de buscar una toma de conciencia por parte de la sociedad⁷⁴.

Otro punto interesante para destacar es el regido por el Artículo N°: 59 donde se establece al hogar de familia como inembargable, allí se señala que en toda familia mientras queden menores, mujeres solteras y discapacitado tienen derecho a declarar ese lote ante la autoridad para que el mismo sea inembargable, inajenable e imprescindible sólo obligado a reconocer el pago de tasas y contribuciones⁷⁵.

En relación al tema de las políticas de Salud, la Constitución de la Provincia de San Juan establece que el Estado debe garantizar el derecho a la Salud a todos los habitantes sin ningún tipo de discriminación ni limitaciones, además deben crearse las condiciones necesarias para garantizar efectivamente este derecho⁷⁶ y sobre las políticas Educativas, se reafirma la igualdad de oportunidades para todos los habitantes⁷⁷.

⁶⁹ Art.N°: 36 – Constitución de la Provincia de Salta

⁷⁰ Art.N°: 38 – Constitución de la Provincia de Salta

⁷¹ Art.N°: 49 – Constitución de la Provincia de Salta

⁷² Art.N°: 19 – Constitución de la Provincia de San Juan

⁷³ Art.N°: 20 – Constitución de la Provincia de San Juan

⁷⁴ Art.N°: 56 – Constitución de la Provincia de San Juan

⁷⁵ Art.N°: 59 – Constitución de la Provincia de San Juan

⁷⁶ Art.N°: 61 – Constitución de la Provincia de San Juan

⁷⁷ Art.N°: 81 – Constitución de la Provincia de San Juan

Provincia de San Lu s

La Constituci n establece desde su Pre mbulo la igualdad de todas las personas⁷⁸.

Tambi n determina el deber de respeto y protecci n de la dignidad e integridad f sica y moral para todas las personas depositando esta obligaci n en forma especial en los poderes p blicos⁷⁹.

La idea de la igualdad de todos los habitantes se ve reforzada por lo expuesto en el Art culo N  16, donde adem s de reafirmar dicha condici n, establece que deber n removerse los obst culos que impidan la efectiva participaci n de todos los habitantes⁸⁰.

Sobre los discapacitados, la Constituci n afirma que los poderes p blicos deben brindar la asistencia apropiada poniendo especial  nfasis en la rehabilitaci n y la educaci n especializada⁸¹.

En el campo de las pol ticas de Salud, la Constituci n garantiza el derecho a la salud para todos los habitantes sin ning n tipo de discriminaci n ni limitaci n⁸².

Con respecto a las pol ticas educativas, la Constituci n de San Luis prev  en dos art culos el tratamiento de la discapacidad, en el primero de ellos sostiene y asegura la igualdad de oportunidades haciendo hincapi  en la ampliaci n de las posibilidades de acceso al sistema⁸³ y en el segundo art culo, en uno de sus incisos, estipula la organizaci n del  rea de Educaci n Especial orientada a la formaci n y rehabilitaci n del discapacitado⁸⁴.

Provincia de Santa Cruz

La Constituci n de esta provincia establece el principio de igualdad de las personas⁸⁵, y reci n en el r gimen municipal, dentro de las atribuciones de los municipios, se realiza una peque a menci n al tema discapacidad, la que por otra parte resulta ser la  nica que se hace en el texto constitucional⁸⁶.

⁷⁸ Pre mbulo – Constituci n de la Provincia de San Luis

⁷⁹ Art.N : 13 – Constituci n de la Provincia de San Luis

⁸⁰ Art.N : 16 – Constituci n de la Provincia de San Luis

⁸¹ Art.N : 52 – Constituci n de la Provincia de San Luis

⁸² Art.N : 57 – Constituci n de la Provincia de San Luis

⁸³ Art.N : 73 – Constituci n de la Provincia de San Luis

⁸⁴ Art.N : 75 – Inc. 6) – Constituci n de la Provincia de San Luis

⁸⁵ Art.N : 9 – Constituci n de la Provincia de Santa Cruz

⁸⁶ Art.N : 150 – Constituci n de la Provincia de Santa Cruz

Provincia de Santa Fe

La Constitución de la Provincia de Santa Fe establece la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la provincia y, además, determina que incumbe al Estado remover todos los obstáculos para que esta igualdad permita el libre desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida social de la comunidad⁸⁷.

También la Constitución determina que el Estado, respecto de los cuidados médicos, debe crear las condiciones necesarias para asegurar el bienestar de sus habitantes y establece que si una persona estuviese impedida de trabajar y se encontrase con carencias de recursos, tiene derecho a que le sean provistos los medios adecuados a sus exigencias de vida⁸⁸.

En lo referido a la Educación, la Constitución hace una breve mención al destacar la especial atención que a los llamados “atípicos” le dedica el Estado Provincial⁸⁹.

Provincia de Santiago del Estero

La Constitución de la Provincia de Santiago del Estero afirma desde sus primeros artículos la igualdad de todas las personas⁹⁰, y resalta que todos los habitantes de la Provincia gozan, entre otros, del derecho a la protección de la salud y a la integridad psicofísica⁹¹.

Todo este planteo de defensa de la igualdad de las personas se nuevamente reforzado y ampliado en el Artículo N° 18, en donde no sólo se vuelve a exponer este reclamo de igualdad, sino que además se señala en forma explícita que no se admitirá ningún tipo de discriminación en base a caracteres físicos. En ese mismo artículo se obliga al Estado a procurar la remoción de los obstáculos que, en la práctica, limiten de hecho el pleno desarrollo de las personas⁹².

⁸⁷ Art.Nº: 8 – Constitución de la Provincia de Santa Fe

⁸⁸ Art.Nº: 21 – Constitución de la Provincia de Santa Fe

⁸⁹ Art.Nº: 109 – Constitución de la Provincia de Santa Fe

⁹⁰ Art.Nº: 2 – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

⁹¹ Art.Nº: 16 – Inc. 2) – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

⁹² Art.Nº: 18 – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

En lo que respecta a las políticas de Salud, la Constitución asegura a la salud como un derecho fundamental de las personas y garantiza, entre otros puntos, la recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes de la provincia⁹³.

Sobre la temática específica de las personas con necesidades especiales se establece que el Estado Provincial promoverá políticas de protección y deberá implementar políticas de prevención y procurar que la sociedad tome conciencia y adopte actitudes solidarias y, por último, deben dictarse normas sobre la plena accesibilidad para todas las personas⁹⁴.

En Educación, la Constitución garantiza la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo⁹⁵.

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

En esta Constitución se establece el derecho para todas las personas que habitan la provincia a la integridad psicofísica y moral y a la libertad e igualdad de oportunidades⁹⁶.

Sobre la discapacidad, y también la excepcionalidad, la Constitución Provincial establece la protección integral de todas las personas con necesidades especiales, garantizando la asistencia, rehabilitación educación, capacitación e inserción social.

Al igual que la Provincia de Santiago del Estero, la Constitución establece que las construcciones públicas deben realizarse contemplando la accesibilidad en los desplazamientos de los discapacitados⁹⁷.

En lo que respecta de las políticas de salud, la Constitución garantiza el derecho a la salud y establece que la Ley de Salud Pública provincial deberá dar prioridad a la asistencia de los distintos tipos de discapacidad⁹⁸.

Sobre la política educativa, el texto constitucional establece que la misma tiene como uno de sus principios el asegurar la educación especial⁹⁹.

⁹³ Art.Nº: 21 – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

⁹⁴ Art.Nº: 33 – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

⁹⁵ Art.Nº: 68 – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

⁹⁶ Art.Nº: 14 – Incs. 2º y 4º – Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

⁹⁷ Art.Nº: 20 – Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

⁹⁸ Art.Nº: 53 – Incs. 3º – Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

⁹⁹ Art.Nº: 58 – Inc. 4º – Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Provincia de Tucumán

La Provincia de Tucumán establece en su constitución que todas las personas tengan el derecho a su integridad psicofísica con una efectiva igualdad de oportunidades, también resalta que el Estado debe brindar protección a los discapacitados¹⁰⁰.

También establece que el Estado debe procurar que las personas gocen de una existencia digna desde la concepción con la debida protección del Estado a su integridad psicofísica, con la posibilidad de disponer de una igualdad en las oportunidades e integrarlos en el plano laboral.¹⁰¹

En los artículos que fijan las atribuciones del Poder Legislativo, se establece que el mismo debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, la protección y desarrollo integral de la niñez, de adolescentes, de personas mayores y con discapacidad.¹⁰²

En el Régimen Municipal, se establece que los municipios deben –entre sus funciones, atribuciones y finalidades- ocuparse de ancianidad, discapacidad y desamparo.¹⁰³

Sobre el cruce entre políticas educativas y discapacidad, la Constitución de la Provincia de Tucumán solamente señala que el Estado promueve, entre las diferentes modalidades educativas a la Educación Especial¹⁰⁴.

Por último, en lo que respecta al tema de la Salud, la Provincia deberá dar especial protección a las personas con discapacidad y asegurará la prestación médica, de servicios de rehabilitación y de apoyo. Se deberán diseñar programas de protección integral de los discapacitados, para que el entorno físico sea accesible y para asegurar su plena integración e igualdad de oportunidades.¹⁰⁵

¹⁰⁰ Art.Nº: 24 – Constitución de la Provincia de Tucumán

¹⁰¹ Art.Nº: 40 – Inc. 1º y 5º - Constitución de la Provincia de Tucumán

¹⁰² Art.Nº: 67 – Inc. 6 - Constitución de la Provincia de Tucumán

¹⁰³ Art.Nº: 134 – Inc.4º d) – Constitución de la Provincia de Tucumán

¹⁰⁴ Art.Nº: 144 – Inc.4º – Constitución de la Provincia de Tucumán

¹⁰⁵ Art.Nº: 146 – Constitución de la Provincia de Tucumán

5. CONCLUSIONES

La intervención estatal en materia de políticas a favor de las personas con discapacidad, ha ido evolucionando en los últimos años. Es cierto que es mucho lo que falta hacer, pero también es cierto que lo que se ha avanzado también ha sido mucho.

El cambio de paradigma ha sido uno de los elementos centrales que enmarca estos cambios positivos, así como la actividad permanente de las numerosas instituciones de lo que se llama el Tercer Sector.

Si consideramos al Estado como un reflejo de la puja de distintos factores de poder observamos que, dejando de lado la invisibilidad que caracteriza a las personas con discapacidad, las entidades representativas de las mismas, en la medida de su incorporación o acercamiento al aparato estatal, están logrando un cambio positivo en tal sentido.

En lo que se refiere a las políticas erráticas sobre la discapacidad, cada vez son menos los casos, dado que la visualización de la presencia de la CoNaDis lleva a una mínima coordinación de las acciones de cada organismo.

En relación con la prevención, por su parte, se observa que es necesario debatir cómo se articulan las distintas actividades llevadas a cabo por los ejecutores de estas políticas sin caer en la tentación de conformar un súper ente burocrático que las reúna.

Además distinguimos tres situaciones en relación con las políticas de prevención:

- 1) Políticas públicas que funcionan razonablemente bien. Por ej.: campañas de vacunación, de acceso universal y cuya efectividad ya ha sido largamente probada.
- 2) Políticas públicas creadas por una norma pero inaplicables en razón del contenido de la misma o el contexto. Por ejemplo el Programa Nacional de Prevención de la Hipoacusia, al haber sido promulgada la ley con exclusión de su financiamiento público implica que solamente estarían obligados a realizar las prácticas que allí se prescriben los terceros pagadores del subsector de la seguridad social y las prepagas, exceptuando así al Estado.
- 3) Políticas públicas creadas recientemente cuyos resultados no son mensurables aun. Por ej. Ley N° 26.279 que amplía el panel de pesquisa neonatal o la Ley de Enriquecimiento de Harinas de 2002 en lo que constituye una estrategia a mediano plazo.

Las autoridades de las instituciones públicas consideran que las campañas de información sobre discapacidad son la principal acción preventiva, a las que siguen la detección temprana y tratamiento. Esta percepción aumenta al visualizar a las instituciones de salud, que señalan a las campañas como actividad de prevención y no mencionan la detección temprana ni la vigilancia epidemiológica. Pareciera existir una confusión entre “promoción” y “prevención”.

Esto parece ser grave cuando se observa que algunas de las instituciones con competencia no realizan actividades de promoción/prevención debido a que no corresponderían a su área. Asumen un rol pasivo, como si su trabajo se limita a “esperar” la llegada de la persona con discapacidad, o la irrupción de la discapacidad.

La vigilancia y la detección de la discapacidad y de sus riesgos deben ser parte de la rutina de los servicios de salud donde puede detectarse tempranamente tanto la discapacidad como el riesgo de una lesión discapacitante. Fuera del sistema, la detección se realiza en los sectores de educación y de trabajo.

En cuanto a las políticas centralizadoras, tomando como eje la CoNaDis, tiene como inconveniente ya expresado su característica de órgano asesor y no ejecutor. Ello es así porque se debe lograr coherencia e integralidad interinstitucional y sectorial (gestión municipal, provincial y nacional).

Se deben profundizar tanto la coordinación de los organismos públicos involucrados –para lograr una acción coherente por parte del Estado–, como el diseño y la implementación de acciones dirigidas a asociar los planes y programas con los recursos económicos necesarios para su concreción.

Esta dificultad a partir del carácter de asesor y no de decisor, tiene un principio de cambio a partir del punto de inflexión que significa la creación del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad en cumplimiento de la Ley N° 24.452 que destina un fondo exclusivo para programas y proyectos destinados a personas con discapacidad. Recordemos que este fondo está integrado por el conjunto de multas impuestas a cuentacorrentistas por diversos incumplimientos.

Esto permitió la llegada de recursos económicos para la concreción de políticas de integración motorizando el interés y un nivel de participación sin precedentes de diversos organismos nacionales y de las provincias. Esta dinámica fue punto de partida para el diseño e implementación del Sistema que se señala en el punto q). Sin duda la llamada “Ley del Cheque” marcó un punto importante en el tratamiento de la temática de la discapacidad.

Reiteramos que nos parece adecuadamente probado por la práctica que el accionar de un organismo que debe ser rector de política pública en determinado ámbito (en este caso el de la discapacidad) solo se hace efectivo cuando también se le otorga competencia

(aunque no sea como único decisor) en la distribución de recursos para implementar dicha política.

Por otra parte, queda claro a partir de lo expuesto que en nuestro país existen una gran cantidad de normativas sobre la temática, las cuales además provienen de distintos niveles del Estado, ya sea Nacional, Provincial, Municipal o de organismos específicos. Esta profusión de normativa nos lleva a dos consideraciones:

En primer lugar, debería existir una instancia de integración y homogeneización de las mismas, de forma tal que este universo de normas aisladas formen un todo integrado, con vocación de universalidad para las personas discapacitadas.

Por otra parte, se evidencia la carencia de cumplimiento de esa normativa. El ejemplo mas paradójico al respecto lo da el propio Estado.

En efecto, el Estado, quien además de originarlas debe velar por el cumplimiento de las Políticas Públicas que emanan de las citadas normativas, es uno de sus principales violadores. Los ejemplos sobran: cupo laboral en el Estado, accesibilidad física de edificios públicos, incumplimientos de normativa de prevención, y en general ausencia de controles.

LISTA DE REFERENCIAS

Informe de Naciones Unidas (HR/PUB/02/1- Número de venta: S.02.XIV.6 - Naciones Unidas - Nueva York y Ginebra) (2002) *“Uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad”* Autores: Gerard Quinn y Theresia Degener con Anna Bruce, Christine Burke, Dr. Joshua Castellino, Padraic Kenna, Dra. Ursula Kilkelly, Shivaun Quinlivan,

Constitución Nacional. Disponible en:

www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en:

www.legislatura.gov.ar/documentos/constituciones/constitucion-ciudad.pdf

Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en:

www.gob.gba.gov.ar/legislacion/constitucion/cpppal.htm

Constitución de la Provincia de Catamarca. Disponible en:

www.catamarca.gov.ar/senado/historia.php

Constitución de la Provincia del Chaco. Disponible en:

www.chaco.gov.ar/tribunalelectoral/Constitucion_Provincial.htm

Constitución de la Provincia del Chubut. Disponible en:

www.legischubut2.gov.ar/index.php?option=com_content&view=section&layout

Constitución de la Provincia de Córdoba. Disponible en:

www.legiscba.gov.ar/cprov_main.asp

Constitución de la Provincia de Corrientes. Disponible en:

www.senado.gov.ar/web/interes/constituciones/cp_corrientes.pdf

Constitución de la Provincia de Entre Ríos. Disponible en:

www.senado.gov.ar/web/interes/constituciones/cp_corrientes.pdf

Constitución de la Provincia de Formosa. Disponible en:
[www.legislaturaformosa.gov.ar/documentos/constitucion 2003.htm](http://www.legislaturaformosa.gov.ar/documentos/constitucion%202003.htm)

Constitución de la Provincia de Jujuy. Disponible en:
www.legislaturajuju.gov.ar/imagenes/constitucion_provincial.pdf

Constitución de la Provincia de La Pampa. Disponible en:
www.lapampa.gov.ar/constitucion.html

Constitución de la Provincia de La Rioja. Disponible en:
www.larioja.gov.ar/servicios/documentos/constitucion2002.pdf

Constitución de la Provincia de Mendoza. Disponible en:
[www.legislaturamendoza.gov.ar/public/Constitucion Provincial.pdf](http://www.legislaturamendoza.gov.ar/public/Constitucion%20Provincial.pdf)

Constitución de la Provincia de Misiones. Disponible en:
www.misiones.gov.ar/htc/dmdocuments/Constitucion_Provincial.pdf

Constitución de la Provincia del Neuquén. Disponible en:
www.neuquen.gov.ar/constitucion/constitucion2006.htm

Constitución de la Provincia de Río Negro. Disponible en:
www.legisrn.gov.ar/const_prov.php

Constitución de la Provincia de Salta. Disponible en:
www.camdipsalta.gov.ar/conprov.htm

Constitución de la Provincia de San Juan. Disponible en:
www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/CONSSANJUAN.htm

Constitución de la Provincia de San Luis. Disponible en:
[www.hcdcorrientes.gov.ar/Constituciones-
Pciales/constituci%F3n_provincia_sanluis.htm](http://www.hcdcorrientes.gov.ar/Constituciones-Pciales/constituci%F3n_provincia_sanluis.htm)

Constitución de la Provincia de Santa Cruz. Disponible en:
www.santacruz.gov.ar/index.php?opcion=constitucion

Constitución de la Provincia de Santa Fe. Disponible en:

www.santafelegal.com.ar/cp.html

Constitución de la Provincia de Santiago del Estero. Disponible en:

[www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/constituciones provinciales/Santiago del Estero 2002.htm](http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dip/congreso/constituciones_provinciales/Santiago_del_Estero_2002.htm)

Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego. Disponible en:

www.tribunalesdecuentas.org.ar/constituciones/constitucion_tierra_del_fuego.htm

Constitución de la Provincia de Tucumán. Disponible en:

www.hlt.gov.ar/constitucion2006.htm